

La PAES y la educación pública

Los resultados de la tercera versión de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), conocidos este lunes, han confirmado tendencias de larga data. Aunque las características de nuestro sistema educativo han cambiado significativamente en el último siglo, la desigualdad, que Darío Salas describió en «El problema nacional», en 1917, continúa acompañándolo.

La atención, por supuesto, se ha concentrado preferentemente en la educación pública, que reúne a cerca de la mitad de los alumnos, si se considera a los establecimientos administrados por municipios o servicios locales de educación, y a más del noventa por ciento del total, si se considera también a los subvencionados. Y, en particular, el foco ha estado en el desempeño de los liceos denominados emblemáticos, y su retroceso en el listado de los colegios con mejores puntajes promedio.

Desde luego es comprensible la preocupación, desde el punto de vista simbólico, por establecimientos que fueron considerados hasta hace algunos años como «vehículos de movilidad social». Sería precipitado, sin embargo, considerar dicha trayectoria como un barómetro preciso del estado de la educación pública.

Una mirada más cuidadosa muestra que

“Existe evidencia para orientar adecuadamente la discusión de las políticas públicas, incluso en el marco de las legítimas diferencias ideológicas”.

el porcentaje de alumnos provenientes de la educación estatal que se encuentran en el 10% de mejor desempeño efectivamente ha caído, desde el 4,9% en 2015 a un 3,8% en 2024, pero que, si se amplía ese rango al 20% más alto de los puntajes, la proporción correspondiente a la educación pública se ha mantenido, en el mismo periodo, estable en torno al 10%.

Que dichos porcentajes no hayan variado en forma significativa, por cierto, no los hace menos lamentables. Más bien al revés, si se considera el aumento considerable del gasto educativo en el mismo periodo. Queda por determinar cuánto han influido en dicha trayectoria los cambios en los instrumentos de acceso, como el fin de la selección o el ranking de notas, y cuánto los cambios sociales ocurridos, que van desde el aumento de la violencia escolar hasta los efectos de la pandemia de covid-19.

Lo más preocupante, tal vez, es cómo la discusión pública en torno a problemas tan

complejos —en el mejor sentido de la palabra— se ha sido desplazando, desde las controversias técnicas e ideológicas en torno a las políticas de educación, hacia una competencia de eslóganes, acusaciones oportunistas y demandas de grupos de interés.

Desde los partidarios de una contrarreforma educativa, que culpan de todos males a los cambios introducidos progresivamente a partir de 2015, hasta el conformismo de algunas autoridades celebrando la «democratización del acceso».

Existe en nuestro país, afortunadamente, una rica investigación académica, y con ello abundante evidencia, que debiera orientar adecuadamente la discusión de las políticas públicas, incluso en el marco de las legítimas diferencias ideológicas. Cuán fundamental es, por ejemplo, que es poner el acento en primera infancia y educación escolar; la importancia de los aprendizajes al interior de sala de clases, por encima de los cambios administrativos; o en cuánto influyen la calidad de los profesores, y el compromiso de las familias, en el desarrollo personal y educativo de niñas, niños y jóvenes. No sólo para mejorar la posición en un ranking, sino, principalmente, para que puedan enfrentar de mejor forma los vertiginosos cambios que se avecinan en el mundo educativo y laboral.